



Oficina Regional de Asesoría Jurídica



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 179 -2015-GRJ/GGR

Huancayo, 23 JUL 2015

EL GERENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal Nº 642-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 16 de Julio del 2015, Solicitud de suspensión de la ejecución de la Resolución Gerencial General Regional Nº 094-2015-GRJ, de fecha 10 de Julio del 2015, interpuesto por el administrado don **MARCELINO CAMPOS URIBE**; y

CONSIDERANDO:

Que, con Documento Nº 1116472 y Expediente Nº 785478, de fecha 10 de Julio del 2015, el administrado MARCELINO CAMPOS URIBE, solicitó suspensión de la ejecución de la Resolución Gerencial General Nº 094-2015-GRJ, de fecha 10 de Julio del 2015;

SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Que, de los documentos se advierte que el administrado Marcelino Campos Uribe ha presentado mediante escrito de fecha 08 de Junio del 2015, Recurso de apelación contra la Resolución Gerencial General Nº 094-2015-GRJ/GGR, con fecha 23 de Junio del 2015, cumpliendo con el requisito previo para poder solicitar Medida Cautelar;

Que, de acuerdo al Artículo 146° - *Medidas cautelares*, prescribe en su numeral **146.1** "Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, **si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir**". **146.2** "Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción". Lo que implica entonces hacer una apreciación de los hechos y obviamente como la doctrina jurídica lo previene verificar la Apariencia del Derecho, el Peligro en la Demora, y que el Pedido Cautelar sea el adecuado para Garantizar la eficacia de la Pretensión;

Que, conforme al artículo 611° del Código Procesal Civil (aplicable supletoriamente a los procesos administrativos), para la autoridad administrativa puede emitir la Medida Cautelar, no basta solamente el pedido de la parte interesada, sino que deben de concurrir tres requisitos: a) La verosimilitud en el derecho, b) El peligro en la demora; y c) La razonabilidad de la medida solicitada para garantizar la eficacia de la decisión. En caso faltase alguno de estos requisitos no sería factible que la autoridad administrativa pudiera dictar medida cautelar;

DOC. 1135621

Exp. 0798265



Oficina Regional de Asesoría Jurídica



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

Que, la **Verosimilitud en el derecho**: está vinculado a la existencia de un vicio notorio, de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta o de una violación legal patente, aunque existen también, pronunciamientos en los que, simplemente, se alude a la impugnación sobre bases, prima facie, verosímiles, o a la ilegalidad o arbitrariedad. Basta que se acredite la probabilidad o fundada posibilidad de que el derecho exista o tenga apariencia de verdadero. El **Peligro en la demora**: a) Que la modificación de la situación existente influya en la sentencia, b) Que la ejecución de la sentencia se convirtiera en eficaz, y c) Que la sentencia sea de cumplimiento imposible. La **Inexistencia de otra cautelar**;

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CASO CONCRETO

Que, la interposición de una Medida Cautelar es autónoma de la pretensión principal, y tiene características propias, toda vez que la autoridad administrativa otorga un derecho anticipado a quien lo solicita, por tanto, las pruebas aportadas, si bien deben dar una apariencia del derecho invocado, ciertamente, éstas no deben ser parte de los indicios que este Despacho toma en cuenta al momento de evaluar una práctica, sino que deben estar orientadas a demostrar a esta autoridad administrativa que lo que se denuncia es aparentemente cierto;

Que, a través del petitorio de medida cautelar y de la copia que ha anexado el administrado, de la Resolución Gerencial General Regional N° 094-2015-GRJ/GGR, de fecha 23 de Junio del 2015, la cual ha resuelto declarar la nulidad de oficio de las Resoluciones Directorales Regionales N° 980-GRJ/ORAF GRJ y N° 981-GRJ/ORAF, ambas de fecha 31 de Diciembre del 2014, por haber sido dictadas en contravención a las normas jurídicas; conviene precisar que la pretensión de la solicitud cautelar es la suspensión de los efectos de la resolución directoral venida en grado de apelación, ante lo cual nos encontramos frente a la figura de suspensión de la ejecución del acto administrativo en el entendido que el numeral 216.1) del artículo 216° de la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General previene **que la sola interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado**;

Que, el artículo 216° de la norma legal invocada previene en su numeral 216.2) que *"No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien compete resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, y b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente*;

Que, en atención a la norma legal citada, de la verificación de la Resolución Gerencial General Regional N° 094-2015-GRJ/GGR, de fecha del 23 de Junio del 2015, materia de suspensión, se tiene que en ella no se aprecia objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente y/o que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación; toda vez que al emitirse el acto administrativo que a través de la medida cautelar el administrado solicita suspender sus efectos, se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 202° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 contempla la llamada nulidad de oficio, por haberse dictado en contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, por defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma,



Oficina Regional de Asesoría Jurídica



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

para proporcionar a la Administración una salida para subsanar o eliminar los vicios incurridos en sus actos administrativos, **aun estos hayan adquirido la calidad de firmes, cuando se aprecie la existencia de un agravio al interés público**, es una suerte de auto limpieza o auto depuración regulada; por tanto los ***"vicios del acto administrativo son las faltas o defectos con que éste aparece en el mundo del Derecho y que, de acuerdo con el orden jurídico vigente, lesionan la perfección del acto, en su validez o en su eficacia, impidiendo su subsistencia o ejecución. La invalidez es la consecuencia jurídica del acto viciado, en razón de los principios de legalidad, justicia y eficacia administrativa. Ahora bien, la gravedad de la invalidez de un acto administrativo no debe medirse por la conducta del agente creador del vicio, sino por la lesión que produzca en los intereses de los afectados y en el orden público y jurídico estatal. Hay una relación de causa y efecto entre vicios y nulidades. Precisamente la nulidad es la consecuencia jurídica que se impone ante la transgresión al orden jurídico. Las nulidades actúan como antibiótico de la juridicidad, para el saneamiento del anti-derecho. Son un resultado obligado del antecedente: los vicios jurídicos"***;



Que, si existiera agravio (a la sociedad) cuando el acto afecta una norma jurídica de orden público, que debe repararse. En relación al **interés público**, el Tribunal Constitucional ha reconocido que; ***"se trata de un concepto jurídico con contenido y extensión variable en atención a las circunstancias, el interés público se concreta y especifica cuando la administración actúa en el campo de sus potestades, teniendo como requisito sine qua non la motivación de sus decisiones, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad, puesto que la administración está obligada a justificar las razones que imponen determinada decisión, de una manera concreta y específica"*** por ello, conviene citar al Tratadista Morón Urbina que sostiene: ***"como se sabe la Administración está sujeta al principio de legalidad, y ello constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, no se podría entender como un acto reconocidamente inválido, no podrá nunca satisfacer el interés que anima a la Administración. Por ello que la posibilidad de la anulación de oficio implica en verdad una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo"***;



Que, según Decreto Legislativo N° 955, que señala: ***"Durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pagos posteriores a la finalización de la administración"***, es así que estos han sido suscritos durante el último año de gestión, en su ejecución originarán la afectación de gastos corrientes y finalmente implican compromisos de pago posteriores a la finalización de la administración, es decir los compromisos de pago se tendrán que atender el año 2015, ejercicio fiscal posterior a la conclusión de la administración que cesó el 31 de diciembre del 2014; por ello, las resoluciones en cuestión son nulos de pleno derecho;

Que, la Ley 27444, artículo 218, prescribe el Agotamiento de la vía administrativa, numeral 218.2 y literal d) prescribe que ***"El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se refiere los Artículos 202° y 203 de esta Ley"***. Conforme lo resuelto en el Artículo Primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 094-2015-GRJ/GGR, de fecha 23 de Junio del 2015;

Que, en aplicación del Principio de Legalidad contemplada en el numeral 1) del artículo IV de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece



Oficina Regional de Asesoría Jurídica



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, debe declararse infundada la solicitud de medida cautelar dentro del procedimiento administrativo, por cuanto, no se evidencia la necesidad de que se dicte la suspensión de los efectos de la resolución directoral cuestionada;

Por los fundamentos expuestos y estando a lo dispuesto por el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva Regional N° 495-2012-GR-JUNIN/PR, de fecha 22 de Noviembre de 2012, que dispone: "El cumplimiento de la Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional Junín en materia de impugnación provenientes de las Direcciones Regionales Sectoriales", contando con el visado de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLÁRESE INFUNDADO la solicitud de MEDIDA CUATELAR de suspensión de la ejecución de la Resolución Gerencial General N° 094-2015-GRJ/GGR, de fecha 23 de Junio del 2015, interpuesto por el Sr. MARCELINO CAMPOS URIBE, por los fundamentos expuestos en el presente.-----

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR por agotada la vía administrativa.-----

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER VAQUEL SALOME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 23 JUL 2015

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL